



‘España Crece’, ¿y Canarias?

RAÚL GARCÍA BRINK

Consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria

Desde Canarias existe la legitimidad y la obligación institucional de exigir para nuestra gente la misma determinación y agilidad que la Moncloa despliega para el resto del Estado

Mientras escribo estas líneas, en distintos puntos de Gran Canaria hay empresas trabajando a contra reloj en instalaciones fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento promovidos por el Cabildo. Cuando este artículo se publique, seguirán haciéndolo, con la diferencia de que el 31 de agosto ya habrá quedado atrás y con él habrá vencido el plazo europeo que condicionaba la financiación de muchas de estas actuaciones. Las obras y los trabajadores continuarán ahí, al igual que la necesidad imperiosa de producir y almacenar energía limpia; lo único que habrá desaparecido será una parte de la financiación comunitaria, en una paradoja imposible de explicar sobre el terreno.

Hay proyectos desplegados por toda la isla —en el Jardín Canario, la ULPGC, Maspalomas, Arinaga Maspalomas o Mogán, entre otros— fruto de años de planificación y de la alianza establecida con 18 ayuntamientos grancanarios para primar la energía solar en cubiertas y aparcamientos. El Cabildo cumplirá sus compromisos y las obras no se van a detener, pero asumir en solitario la cuota europea se pagará frenando las siguientes inversiones. El verdadero coste de perder fondos no se mide solo en euros, sino en un tiempo valioso que desacelera la transición ecológica justo cuando los fondos Next Generation nacieron para acelerarla.

Durante meses hemos desplegado un

esfuerzo colectivo impecable en el que el Gobierno autonómico, los cabildos y los ayuntamientos hemos defendido la flexibilización de plazos junto a la Comunidad Energética de El Goro, FEMEPA, UNEF, AEO-LICAN, ACER y SORECAN. Explicamos con rigor los condicionantes del transporte y los suministros en una Región Ultraperiférica, recordando que no tenía sentido penalizar obras en ejecución que solo requerían unos meses más para culminar. Por eso causa una profunda frustración que la fecha límite expire sin la flexibilidad necesaria por parte de Bruselas, pero también sin que el Ministerio hiciera valer con mayor firmeza la singularidad canaria en las negociaciones.

Nosotros no renunciamos ni vamos a dar por cerrada la batalla por la extensión de los plazos de Next Generation, porque la razón jurídica y nuestra realidad RUP nos avalan para seguir exigiendo esa prórroga. Sin embargo, si la rigidez burocrática se impone, la contradicción política se vuelve insostenible. Ha sido el propio presidente Pedro Sánchez quien ha presentado a gran escala el fondo ‘España Crece’, diseñado para que el ICO movilice hasta 120.000 millones de euros en inversión productiva y extienda el impacto de las renovables y la transición ecológica más allá de 2026. Cuando el Ejecutivo central ha querido encontrar la arquitectura técnica y la audacia política para que el impulso inversor no

se detenga en la Península, la solución ha aparecido de inmediato. Mientras tanto, en las islas revisamos cada día el Boletín Oficial del Estado sin encontrar ni una sola señal, ni una línea que concrete el compromiso con nuestra tierra. Desde Canarias existe la legitimidad y la obligación institucional de exigir para nuestra gente la misma determinación y agilidad que la Moncloa despliega para el resto del Estado.

Si no se logra revertir el calendario europeo, el instrumento anunciado por Pedro Sánchez debe convertirse de inmediato en el Plan B para Canarias. El ministerio, el ejecutivo autonómico, los cabildos y el sector privado debemos sentarnos a articular una ventana específica para nuestra condición

El verdadero coste de perder fondos no se mide solo en euros, sino en un tiempo valioso

RUP dentro de ‘España Crece’, no para solicitar ayudas a fondo perdido, sino para activar financiación a largo plazo, garantías y bonificaciones. Solo el Cabildo tiene una veintena de actuaciones maduras preparadas, a las que

se suma un volumen decisivo de proyectos clave impulsados por el tejido empresarial privado del archipiélago. Si el presidente del Gobierno ha demostrado que sabe construir fórmulas para que la economía española ‘no levante el pie del acelerador’, esa misma voluntad política debe cruzar el Atlántico y plasmarse en el BOE sin más excusas burocráticas.

España crece. ¿Y Canarias, presidente?

